



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN
SALA UNITARIA DE DECISIÓN

Medellín, veintiocho de febrero de dos mil veinticuatro

Procedimiento:	Responsabilidad civil contractual
Radicado:	050013103022202100243 02
Demandante:	Javier Orlando Ramírez Martínez
Demandado:	Seguros Bolívar S.A.
Procedencia:	Juzgado Veintidós Civil del Circuito de Medellín
Decisión:	Confirma

Resumen: Las agencias en derecho podrán ser fijadas por el juez, con cierta discrecionalidad, pero bajo los parámetros del Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016. No es viable solicitar, por razones de igualdad, que se fijen agencias en derecho idénticas a las ya tasadas en un momento anterior por el *a quo*, en una decisión que ya fue revocada.

ASUNTO

El presente auto tiene por objeto resolver el recurso de apelación del demandante frente a la providencia del 27 de noviembre de 2023 del Juzgado Veintidós Civil del Circuito de Medellín, que dispuso cumplir con el fallo de segunda instancia y fijó agencias en derecho en favor de la parte actora.

ANTECEDENTES

1. La Sala Primera de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín, en sentencia de 4 de octubre de 2023, revocó la decisión del *a quo* que desestimó las pretensiones de la demanda de responsabilidad civil contractual interpuesta por Javier Orlando Ramírez Martínez en contra de Seguros Bolívar S.A. En su lugar, condenó a la aseguradora a pagar la suma de \$157.338.756 y por las costas en ambas instancias.
2. Cumpliendo la orden del superior, mediante auto de 27 de noviembre de 2023, el juzgado fijó agencias en derecho a favor del actor y a cargo de la aseguradora por el valor de \$3.600.000.

3. Se recurre por el demandante el auto referido, cuestionando, en virtud de la igualdad, que las agencias a pagar -\$3.600.000- fueran inferiores a las fijadas en su contra en la providencia inicialmente revocada -\$6.000.000-.

4. El *a quo* no repuso su decisión indicando que el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, que establece los parámetros para la fijación de agencias en derecho, no ata al juez para tasar unas idénticas cuando ocurre una revocatoria. Expuso, además, que según se estime la actuación de un apoderado más destacada que otra, no tiene que darse igual tratamiento a lo que es diferente.

5. La parte actora, al sustentar la alzada, precisa que la juez omitió explicar las razones por las cuales el desempeño del abogado de la aseguradora fue mejor valorado que el suyo. Insiste en la necesidad de tasar unas agencias superiores teniendo en cuenta la gestión realizada al interior del proceso.

CONSIDERACIONES

Problemas jurídicos:

¿Qué parámetros deben tenerse en cuenta en para fijar agencias en esta ocasión? Cuando el superior funcional revoca una sentencia del *a quo* que ya había hecho una tasación de agencias en derecho, ¿puede considerarse en la nueva providencia que las fija, y en relación con la contraparte, una cantidad diferente a la inicialmente establecida?

Fundamentos jurídicos

El artículo 366.4 del Código General del Proceso preceptúa que “para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura”. Este es el caso del Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 que regula las tarifas de agencias en derecho y establece los criterios para su fijación en los procedimientos de “jurisdicción ordinaria” que se tramiten en la especialidad civil. A propósito, el artículo 2 del acuerdo expresa que:

“...el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía

del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada...”

El artículo 3 *ejusdem*, cuando las pretensiones son de índole pecuniario, establece que como valor de agencias en derecho se tasarán un porcentaje de estas; y el artículo 5 los especifica. Así el juez, puede realizar la tasación entre unos mínimos y unos máximos, teniendo en cuenta criterios ya referidos en el artículo 2, además de los precisados en el párrafo 3 del artículo 3¹. Para los procedimientos declarativos de mayor cuantía, en primera instancia, se fija entre el 3% y el 7.5% de lo pedido en la demanda.

De lo regido por el acuerdo se desprende que, para casos en los que se pretendan condenas pecuniarias, se le otorga cierta discrecionalidad al juzgador para fijar las agencias entre los límites establecidos en porcentajes. Siempre será necesario valorar la cuantía del negocio, la condena impuesta en sentencia, el tipo de actuación realizada, la calidad que se observe de ella, la duración de la misma, y demás gestiones relacionadas con el impulso y trámite del proceso; dentro de esos parámetros, el juez tendrá que evaluar con detenimiento la actuación judicial del apoderado de las partes y con base en ello, indicar un porcentaje razonable.

Caso concreto

La recurrente argumenta una posible violación del derecho a la igualdad por la diferencia entre las agencias en su contra -(\$6.000.000)-, y las que fueron liquidadas en su favor tras la segunda instancia -(\$3.600.000). Si bien, se plantea un reparo que puede tener cierta relevancia aún en un contexto constitucional, resulta manifiestamente infundado en la medida que se considera una supuesta simetría inexistente que no consulta los parámetros que por ley se imponen cuando deban tasarse agencias frente a un litigante vencido.

Resulta inadmisibles que se pretenda una fijación de una suma idéntica a la ya establecida en decisión revocada y en la que se liquidaron las agencias con base en un 5% de lo pretendido. Esa antigua decisión no tenía carácter vinculante, y lo que se imponía, más bien, era hacer un nuevo estudio del caso para fijar nuevamente las agencias teniendo en cuenta los parámetros de

¹ El párrafo 3 del artículo 3 indica que: *Cuando las tarifas correspondan a porcentajes, en procesos con pretensiones de índole pecuniario, la fijación de las agencias en derecho se hará mediante una ponderación inversa entre los límites mínimo y máximo y los valores pedidos. Esto es, a mayor valor menor porcentaje, a menor valor mayor porcentaje, pero en todo caso atendiendo a los criterios del artículo anterior.*

ley, tales como “la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado”.

La juez de primer grado, en este nuevo ejercicio de valoración tasó como agencias en derecho en favor del demandante el 3% de las pretensiones. Se trata de una cifra que a juicio del tribunal, resulta razonable. Se trata de un proceso en el que la parte actora, integrada por persona natural y sujeto singular, estuvo representado por un apoderado diligente, y que participó de en un procedimiento verbal cuyos ritmos y tiempos ante la primera instancia fueron razonables (26 de julio de 2021 a 7 de junio de 2023). No es posible considerar que hubo dilaciones que hayan comprometido la duración de la gestión realizada por el abogado de la parte demandante.

Cada apoderado, trató de cumplir de la mejor manera con sus obligaciones de medio, en relación con las partes que representan, en un asunto que si bien, tuvo varios dilemas jurídicos que resolver y distintos elementos probatorios que incorporar a efectos de su valoración, esto no significa que el juez tenga que establecer porcentajes de un 5%, u otro que se acerque al máximo del acuerdo (7.5%).

Y es que la cantidad de \$120.000.000, aunado a los intereses, es una suma no despreciable, de manera que una liquidación en agencias debe realizarse con sumo tino. No se olvide el criterio que para el caso establece el parágrafo 3 del artículo 3 del acuerdo en estudio. Así las cosas, que la juez haya fijado en su momento \$6.000.000 por agencias en derecho a favor de la demandada, no significa que luego, de revocarse la sentencia de instancia, deba estipular la misma cantidad a favor de la contraparte. Además, no se olvide que el demandante tiene en su favor unas agencias en derecho generadas en segunda instancia.

Por supuesto que no puede aceptarse el argumento ofrecido por la juez de calificar la gestión de un abogado más destacada que la otra; la labor desempeñada por el apoderado de la parte demandante fue responsable, diligente, y oportuna. Incluso, su gestión fue importante para que el asunto se conociera en segunda instancia, y se lograra la revocatoria de la sentencia del *a quo*. De ahí que no pueda descalificarse o infravalorarse en relación con la contra parte.

Teniendo en cuenta lo anterior, siempre y cuando se respeten los extremos porcentuales -3% a 7.5%- y los parámetros establecidos en el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, hay cierta discrecionalidad en la actividad realizada por el juzgador en lo corresponde a la fijación de las

agencias. El tribunal advierte estimación razonable en la tasación de las mismas por parte del *a quo*, sin que haya un motivo suficiente para establecer un monto superior, en los términos establecidos por la parte recurrente.

En tal sentido, no puede accederse a lo pretendido por el apelante, razón por la cual se confirmará el auto referido.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín en Sala Unitaria de Decisión;

RESUELVE: Confirmar la providencia de fecha y origen indicado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTÍN AGUDELO RAMÍREZ
MAGISTRADO

Firmado Por:

Jorge Martin Agudelo Ramirez

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Dirección Ejecutiva De Administración Judicial

División De Sistemas De Ingeniería

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **adccb4382fdc84561919768dd5e76a4ab19197ebbc39c870bda87829c2062250**

Documento generado en 28/02/2024 04:10:51 p. m.

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>